

"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (...)" Art. 1 de la Declaración Universal de los DD HH
"Tots els éssers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets (...)" Art. 1 de la Declaració Universal dels DD HH

| | |
|------------------|--|
| Queja | 2300858 |
| Materia | Educación. |
| Asunto | Falta de respuesta: seguridad centro. |
| Actuación | Resolución de consideraciones a la Administración. |

RESOLUCIÓN DE CONSIDERACIONES A LA ADMINISTRACIÓN

1 Antecedentes

El 07/03/2023, la persona promotora del expediente interpuso una queja en la que manifestaba la demora y falta de respuesta a su escrito en cuanto al mantenimiento de los extintores contra incendios por parte del Ayuntamiento de Orihuela en el centro docente público CEIP "Rincón de Bonanza" de Orihuela.

El 10/03/2023, admitida la queja a trámite, se requirió a la Entidad Local que remitiera al Síndic de Greuges un informe, concediéndole al efecto el plazo de un mes, solicitando en particular información sobre los siguientes extremos:

1. Indíquenos si es cierto que desde el año 2021 hasta la fecha no han sido revisados (verificación y mantenimiento) los extintores de incendios existentes en el Colegio.

En caso afirmativo:

- Causas por los que no se han revisado los extintores del centro docente.
- Medidas adoptadas para solventar, en su caso, estos obstáculos.
- Concreta previsión temporal para proceder a la verificación y mantenimiento de estos.

2. En cuanto al escrito formulado por el ciudadano:

- Causas que han justificado no dar respuesta expresa y directa al escrito.
- Concreta previsión temporal para dar respuesta al escrito. sobre «la respuesta dada al interesado; en el caso de que ésta no se hubiera producido todavía, nos ofrecerá información sobre las causas que han impedido cumplir con la obligación de contestar el escrito presentado por el ciudadano y las medidas adoptadas para remover estos obstáculos, con indicación expresa de la previsión temporal existente para proceder a la emisión de la citada respuesta».

Transcurrido el plazo de un mes, no se ha recibido el informe requerido al Ayuntamiento de Orihuela, ni consta que este haya solicitado la ampliación del plazo para emitirlo, por lo que esta institución no ha podido contrastar los hechos denunciados por el autor de la queja, de manera que resulta forzoso partir de la veracidad de los mismos y de la pasividad municipal a la hora de dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado en fecha 30/01/2023, abordando y resolviendo todas y cada de las cuestiones planteadas en el mismo.

2 Consideraciones

De la documentación obrante en el expediente, procedemos a centrar la presente queja en los siguientes presupuestos de hecho:

- La falta de respuesta al escrito formulado por el ciudadano de fecha 30/01/2023.
- El "presunto" incumplimiento por parte de la corporación local de la verificación y mantenimiento de los extintores del CEIP "Rincón de Bonanza" y la seguridad de los menores.
- La falta de colaboración de la Entidad Local al no haber remitido a esta institución el informe requerido con fecha 10/03/2023.

2.1 Sobre la falta de respuesta al escrito formulado por el ciudadano

Una vez precisado lo anterior, no podemos olvidar que el presente expediente se inició por la posibilidad de que se hubiera afectado el derecho de la persona interesada a obtener en el plazo legalmente establecido una respuesta expresa y motivada a los escritos que se presenten ante las administraciones públicas, en el marco del derecho a una buena administración (artículos 8 y 9 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana).

Como se ha señalado con anterioridad, ninguna información ha aportado el Ayuntamiento de Orihuela sobre el objeto de la reclamación de la persona interesada, por lo que hemos de partir de la veracidad de las alegaciones formuladas por esta cuando señala que no ha obtenido una respuesta a su escrito de 30/01/2023, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces.

Respecto de esta falta de respuesta a los escritos presentados por la persona interesada, es preciso tener en cuenta que el artículo 21 (Obligación de resolver) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es claro al señalar que «la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación».

Asimismo, esta previsión ha de ser puesta en conexión con lo establecido en el artículo 29 de la citada norma procedimental, cuando señala que «los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos».

Por otra parte, debemos recordar que el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana reconoce que «todos los ciudadanos tienen derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y en un plazo razonable».

En relación con esta cuestión, debe tenerse en cuenta que el artículo 8 de nuestro Estatuto de Autonomía (norma institucional básica de nuestra comunidad autónoma) señala que «los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea (...)», indicando que «los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes».

A su vez, el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Derecho a la Buena Administración) establece que «toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable».

La vigencia de las disposiciones analizadas consideramos que impone a las administraciones un plus de exigencia a la hora de abordar el análisis de los escritos que les dirijan los ciudadanos y darles respuesta, en el marco del derecho a una buena administración.

Tal y como ha expuesto el Tribunal Supremo en su sentencia 1667/2020, de 3 de diciembre, «el principio a la buena administración (...), merced a lo establecido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha adquirido el rango de derecho fundamental en el ámbito de la Unión, calificándose por algún sector doctrinal como uno de los derechos fundamentales de nueva generación (...)».

Este derecho a una buena administración se conforma así como un derecho básico y esencial de la ciudadanía valenciana, que se integra, como mínimo, por los derechos de la persona a que las administraciones públicas atiendan en un plazo razonable las peticiones que esta les formule, dando una respuesta expresa y motivada a las mismas, de manera que el ciudadano pueda conocer en todo momento cuál es la posición de la administración concernida respecto de su problema, para, en caso de discrepancia, poder ejercer las acciones de defensa de sus derechos que estime más adecuadas.

Lo que no cabe en ningún caso es que, ante una petición formulada por la persona interesada conforme a los requisitos exigidos legalmente, la administración no ofrezca una resolución o emita una resolución

carente de la justificación adecuada que permita al solicitante entender los motivos por los que la administración ha adoptado la citada resolución.

Llegados a este punto, esta institución no puede sino recordar, una vez más, que el principio de eficacia (art. 103.1 de la Constitución Española) exige de las Administraciones Públicas que se cumplan razonablemente las expectativas que la sociedad legítimamente le demanda, entre ellas, y harto relevante, el deber de la Administración de resolver expresamente las peticiones y reclamaciones que le presenten los particulares, ya que el conocimiento cabal por el administrado de la fundamentación de las resoluciones administrativas, constituye un presupuesto inexcusable para una adecuada defensa de sus derechos e intereses legítimos.

En este sentido, el Tribunal Constitucional tiene dicho, desde antiguo, en su Sentencia núm. 71, de fecha 26 de marzo de 2001, que «es evidente, como hemos declarado en reiteradas ocasiones (por todas, SSTC 6/1986, de 21 de enero, FF. 3; 204/1987, de 21 de diciembre, F. 4; 180/1991, de 23 de septiembre, F. 1; y 86/1998, de 21 de abril, FF. 5 y 6), que la Administración no puede verse beneficiada por el incumplimiento de su obligación de resolver expresamente en plazo solicitudes y recursos de los ciudadanos, deber éste que entronca con la cláusula del Estado de Derecho (art. 1.1 CE), así como con los valores que proclaman los arts. 24.1, 103.1 y 106.1 CE».

Finalmente, consideramos preciso destacar que el artículo 33.2.c de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Sindic de Greuges, faculta a este para instar a las administraciones públicas a «resolver, en tiempo y en forma, las solicitudes presentadas y los recursos planteados en su ámbito competencial».

2.2 Sobre la seguridad de los menores

Hay que partir del siguiente supuesto. En el escrito de queja, entre otros extremos, se determinaba la falta de mantenimiento y verificación de los extintores de incendios en el CEIP “Rincón de Bonanza” desde el año 2021.

Reseñar que entre los principios rectores y las líneas de actuación que han de regir las políticas públicas de infancia y adolescencia tenemos como básico el principio del interés superior del niño, niña o adolescente, recogido en la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia, redactado conforme a las previsiones contenidas en la Convención sobre los derechos del niño adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y así:

1. El derecho de todo niño, niña y adolescente a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que les conciernan, ya sea individual o colectivamente, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que les afecten, así como en las medidas que adopten sus familias, en cualquiera de sus manifestaciones, y las instituciones, públicas o privadas, primará su interés superior.

A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior del niño, niña o adolescente, se tendrán en cuenta los criterios generales, los elementos de ponderación y las garantías del debido proceso, recogidos en el artículo 2 de la LO 1/1996.

Así como que el artículo 1.3 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, de la Generalitat del Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, establece:

3. Las actuaciones del Sindic de Greuges tienen que atender especialmente la protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia reconocidos por la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño y por la legislación sobre la infancia y la adolescencia y de quienes puedan encontrarse, de acuerdo con el artículo 19 de esta ley, en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, así como la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres. A estos efectos, el Sindic de Greuges tiene la condición de defensor de los derechos de la infancia y de la adolescencia, sin detrimento de las funciones que correspondan al Ministerio Fiscal.

Y si bien el Sindic no tiene facultades legales para discutir la organización de los servicios de obligado cumplimiento de las entidades locales, ni dispone de asesores técnicos que puedan poner en cuestión las

decisiones adoptadas por la autoridad municipal en el ámbito de sus competencias, no es menos cierto que sí que puede formular recomendaciones a los efectos de la protección y garantía de la seguridad de los menores de edad que pudiese ser vulnerada en aras del interés superior del menor y la salvaguarda de los derechos de las personas menores.

Sentado lo anterior recordar que el CEIP “Rincón de Bonanza” es un centro docente público de propiedad municipal.

Y que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su Disposición Adicional Decimoquinta: Municipios, corporaciones o entidades locales, en su punto 2, dispone:

(...) La conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial, corresponden al municipio respectivo (...).

Por todo ello es obligación del Municipio el mantenimiento de las instalaciones de protección activa contra incendios, en este caso los extintores del centro docente, con sujeción en su actuación a lo dispuesto en el Reglamento 513/2017, de 22 de mayo, y normativa concordante.

2.3 Sobre la conducta de la Administración local y la falta de colaboración

El artículo 39.1.a) de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, establece lo siguiente:

“Se considerará que existe falta de colaboración con el Síndic de Greuges cuando, en los plazos establecidos para ello, se produzcan los siguientes hechos:
a) No se facilite la información o la documentación solicitada (...).”

El Ayuntamiento de Orihuela todavía no ha remitido a esta institución el informe requerido con fecha 10/03/2023, incumplándose el plazo legal máximo de un mes (artículo 31.2 de la citada Ley 2/2021).

Si el Ayuntamiento de Orihuela se niega a colaborar con el Síndic de Greuges, se hará constar en las resoluciones que pongan fin al procedimiento, así como en los informes anuales, especiales y extraordinarios que emita el Síndic de Greuges ante Les Corts Valencianes, en cuyo caso se indicará también la identidad de las personas responsables.

3 Resolución

A la vista de lo que hemos expuesto y conforme a lo que establece el artículo 33 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, formulamos las siguientes recomendaciones y recordatorios de deberes legales:

1. **RECUERDO** al Ayuntamiento de Orihuela **EL DEBER LEGAL** de contestar en el plazo legalmente establecido, expresa y motivadamente, los escritos que los interesados presenten ante esa administración pública, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la legislación concordante.
2. **RECOMIENDO** al Ayuntamiento de Orihuela que proceda, si no lo hubiera hecho ya, a dar una respuesta expresa y motivada al escrito presentado por el interesado en fecha 30/01/2023, abordando y resolviendo todas las cuestiones planteadas en el mismo, notificándole la resolución que se adopte e informándole de las acciones que pueda ejercer para la mejor defensa de sus derechos, en caso de discrepancia con su contenido.
3. **RECOMIENDO** al Ayuntamiento de Orihuela que proceda de forma inmediata a la revisión, verificación y el consiguiente mantenimiento de los extintores del CEIP “Rincón de Bonanza” en cumplimiento de sus obligaciones legales, en aras del interés superior del menor y la salvaguarda de los derechos de las personas menores, así como de toda la Comunidad Educativa.

4. **RECOMIENDO** al Ayuntamiento de Orihuela que por empresa autorizada/homologada se certifique el correcto funcionamiento de los extintores del centro docente público.
5. **RECUERDO** al Ayuntamiento de Orihuela **EL DEBER LEGAL** de colaborar con el Síndic de Greuges, facilitando la información solicitada y contestando a las recomendaciones, sugerencias o recordatorios de deberes legales efectuados.
6. El Ayuntamiento de Orihuela está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento respecto de las recomendaciones o sugerencias contenidas en la presente resolución. Así:
 - Si manifiesta su aceptación, hará constar las medidas adoptadas para su cumplimiento. Si el plazo para cumplirlas resultara superior, la respuesta deberá justificar esta circunstancia e incluir el plazo concreto comprometido para ello.
 - La no aceptación habrá de ser motivada
7. Se acuerda notificar la presente resolución al Ayuntamiento de Orihuela y a la persona interesada.
8. Se acuerda publicar esta resolución en la página web del Síndic de Greuges.

Ángel Luna González
Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana